



REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Santiago de Cali – Valle del Cauca

DESPACHO: Juzgado 3 Civil del Cto de Ejecución de sentencias

PROCESO: Ejecutivo Singular

DEMANDANTE: MARIA MAGDA TANGARIFE CARDONA

APODERADO: LILIANA QUIJANO TELLO

DEMANDADO: COOMEVA E.P.S S.A

Número Único de Radicación:

76001-31-03-014-2002-00114-00

Ciudad	Corporación	Especialidad	Despacho	Año	Consecutivo	Recurso
--------	-------------	--------------	----------	-----	-------------	---------

TOMO: FOLIO: CUADERNO: 8

Fecha de Radicación: 09/08/2002

Subclase de proceso: Por sumas de dinero

ARCHIVO

CUADERNOS: 8

FOLIOS: 8-47-674-2-60-15-13-46

FECHA: 17/07/2018

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI

**EJECUTIVO A
CONTINUACIÓN**

DEMANDANTE: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
DEMANDADA: MARÍA MAGDA TANGARIFE Y
OTROS.

RAD: 76-001-31-003-14-2002-00114-00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO
DE CALI

MEDIDAS CAUTELARES

**DEMANDANTE: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
DEMANDADA: MARÍA MAGDA TANGARIFE Y
OTROS.**

RAD: 76-001-31-003-14-2002-00114-00

G. HERRERA & ASOCIADOS

Señores

A B O G A D O S S . A . S .

JUZGADO (19) DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E. S. D.

JUZGADO 19

CIVIL CIRCUITO DE CALI

Referencia: Proceso Ejecutivo Seguido del Ordinario.
Demandante: Axa Colpatria Seguros S.A.
Demandado: María Magda Tangarife Cardona y Otros.
Radicación: 2002-00114-00

2 Folios

17 JUL 13 am 11:10

Qc

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA mayor, vecino de Cali, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 19.395.114 de Bogotá y T.P. N° 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de Apoderado Especial de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.**, mediante el presente escrito, y en virtud de lo dispuesto por los artículos 305 y 366 del Código General del Proceso, que establecen que podrán cobrarse ejecutivamente las costas procesales una vez ejecutoriado el auto que las apruebe o imponga, comedidamente solicito a su Despacho que en ese sentido libre MANDAMIENTO EJECUTIVO DE PAGO en contra de los señores MARIA MAGDA TANGARIFE, CARMENZA MORENO TANGARIFE, ALCIDES MORENO, REYNALDO DE JESUS MORENO y EDWIN MORENO TANGARIFE y a favor de mi mandante AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., por las sumas que más adelante relacionaré con base en los siguientes fundamentos:

FUNDAMENTOS FÁCTICOS Y JURÍDICOS

Primero: Mediante sentencia de primera instancia de fecha 26 de mayo de 2017, notificada en estado No. 074 del 30 de mayo de los presentes, el Juzgado (19) Diecinueve Civil del Circuito de Cali, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR probadas las excepciones formuladas por los demandados y llamada en garantía, tendientes a desacreditar los elementos estructurales de la responsabilidad médica.

SEGUNDO: En consecuencia, se niegan todas las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condenar en costas a los demandantes salvo a JEFERSON MARTINEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO, a favor de los demandados y la aseguradora llamada en garantía en igual proporción. Líquidense por secretaría e inclúyanse en la liquidación a practicar la suma de \$4.740.000 por concepto de agencias en derecho.

Segundo: El Despacho mediante auto de fecha 23 de junio de 2017, procedió a liquidar las costas y agencias en derecho de la siguiente manera:

AGENCIAS EN DERECHO

\$4.470.000

COSTAS
TOTAL

-0-
\$4.470.000

Tercero: Mediante auto de fecha 23 de junio de 2017, notificado en estado No. 90 del 27 de junio de los presentes, el Despacho aprobó la liquidación de costas reseñada en el numeral anterior por encontrarse ajustada a derecho.

Cuarto: Dado que el auto que aprobó la liquidación de costas y agencias en derecho quedó ejecutoriado desde el día 4 de julio de 2016, desde esta misma fecha comenzaron a causarse los respectivos intereses moratorios, a la tasa máxima del 6% anual, conforme a lo dispuesto en el Artículo 1617 del Código Civil.

Quinto: A la fecha de presentación de éste escrito, los demandados, no han cancelado a mi poderdante la totalidad de los valores a las que fueron condenados por concepto de costas, con base en lo estipulado en el artículo 366 del C.G del P.

PETICIÓN

Teniendo como fundamento los argumentos expuestos en los párrafos anteriores, respetuosamente solicito al Despacho librar mandamiento ejecutivo de pago en los siguientes términos:

1. Librar mandamiento de pago en contra de MARIA MAGDA TANGARIFE, CARMENZA MORENO TANGARIFE, ALCIDES MORENO, REYNALDO DE JESUS MORENO TANGARIFE, EDWIN MORENO TANGARIFE, y a favor de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., por la suma de **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.185.000,00)**, por el porcentaje que corresponde a mi prohijada por concepto de costas y agencias en derecho.
2. Por los intereses moratorios que se hayan causado y en proporción a la tasa máxima del 6% anual, respecto a la suma de **UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS (\$1.185.000,00)**, desde el día 4 de julio de 2017, fecha en la cual quedó ejecutoriada la providencia por medio de la cual se imparte aprobación a la liquidación de costas y agencias en derecho.
3. Por las costas y agencias en derecho que se causen en desarrollo del presente cobro ejecutivo.

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES


Se sirva decretar el embargo y retención de las sumas de dinero que los demandantes MARIA MAGDA TANGARIFE, CARMENZA MORENO TANGARIFE, ALCIDES MORENO,

REYNALDO DE JESUS MORENO TANGARIFE, EDWIN MORENO TANGARIFE, tenga depositados o llegaren a depositar en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, Cdt's, etc..., en las diferentes entidades crediticias o bancarias y de servicios financieros, para lo cual le solicito librar oficio circular a los gerentes de las oficinas principales de:

- BANCO DE BOGOTÁ
- BANCO POPULAR S.A.
- BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
- BANCOLOMBIA S.A.
- CITIBANK-COLOMBIA
- BANCO GNB COLOMBIA S.A.
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.
- HELM BANK S.A.
- BANCO DE OCCIDENTE S.A.
- BCSC S.A.
- BANCO DAVIVIENDA S.A.
- BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
- BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
- BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
- BANCO PROCREDIT COLOMBIA S.A.
- BANCO DE LAS MICROFINANZAS -BANCAMÍA S.A.
- BANCO WWB S.A.
- BANCO COOMEVA S.A.
- BANCO FINANDINA S.A.
- BANCO FALABELLA S.A.
- BANCO PICHINCHA S.A.
- EL BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
- BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S. A

Sírvase Señor Juez, librar los respectivos oficios dirigidos a las diferentes entidades financieras.

Cordialmente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA
C.C. No. 19.395.114 de Bogotá.
T.P. No. 39.116 C. S. de la J.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103014-2002-00114-00

SANTIAGO DE CALI, 24 DE JULIO DE 2017

Teniendo en cuenta que la providencia judicial traída como título ejecutivo reúne las formalidades del artículo 422 del C.G.P, concordante con los art. 306 y 430 ibídem, el Juzgado,

RESUELVE:

PRIMERO.- ORDENAR a la **MARÍA MAGDA TANGARIFE, ALCIDES MORENO, REYNALDO DE JESÚS MORENO TANGARIFE y EDWIN MORENO TANGARIFE** y a favor de **AXA COLPATRIA SEGUROS S.A**, pagar dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación por estado del presente proveído la siguiente suma de dinero:

A.- La suma de UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (1.185.000.00), por concepto de costas en el porcentaje que le corresponde al demandante contenido en la providencia del 26 de mayo de 2017 (Fl. 660 C1).

B.- Por los intereses sobre la suma contenida en el numeral "A" de esta providencia, a la tasa del 6% efectivo anual desde el día 4 de julio de 2017 hasta el pago efectivo de la obligación.

C.- Sobre las costas procesales se decidirá una vez llegue la oportunidad procesal pertinente.

SEGUNDO.- Teniendo en cuenta que el escrito de demanda o la solicitud para que se libre mandamiento de pago fue presentada dentro de los 30 días después de la ejecutoria de la providencia que aprueba la liquidación de costas y agencias en derecho proveniente del proceso ordinario bajo la radicación 14-2002-00114, conforme al artículo 306 inciso segundo del C.G.P la presente providencia se notifica por estados, en tanto que los ejecutados cuentan con el término de diez (10) días para ejercer su derecho a la defensa con las limitaciones que impone el numeral 2 del artículo 442 del mismo estatuto.-

NOTIFÍQUESE

CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA

JUEZ

JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EN EL ESTADO No. **107**
EN LA FECHA, **25 JUL 2017**
NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL AUTO ANTERIOR, SIENDO LAS 8:00 AM.

CAROLINA MARIA AVILA RENGIFO
SECRETARIA

04 / A.I.

4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103014-2002-00114-00

SANTIAGO DE CALI, 04 DE MAYO DE 2018

En atención a que la parte demandada MARÍA TANGARIFE, ALCIDES MORENO, REYNALDO DE JESÚS MORENO TANGARIFE Y EDWIN MORENO TANGARIFE, no propusieron ninguna excepción frente a la orden de apremio, el Juzgado procede a impulsar la ejecución de la demanda presentada por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.

I. ANTECEDENTES

Mediante demanda ejecutiva las demandantes anteriormente mencionadas solicitan que se ordene a la demandada, el pago de las sumas de dinero reconocidas y ordenadas mediante la sentencia de 26 de mayo de 2017.

II. TRAMITE PROCESAL.

Por encontrar reunidos los requisitos legales exigidos, el Juzgado profirió la orden de pago suplicada (fl.3 cuaderno 2).

Una vez notificada la parte demandada, dentro del término dispuesto para ello (art. 306 C.G.P), se abstuvo de formular excepciones frente a la orden de apremio.

III. CONSIDERACIONES

1. Ningún reparo debe formularse sobre los presupuestos procesales, como quiera que la demanda iniciadora del debate es apta formalmente, los intervinientes tienen capacidad procesal para ser parte, el Juzgado es competente para conocer y resolver el litigio, y por último no se observa causal de nulidad que pudiere invalidar lo actuado.

2. Los procesos ejecutivos no tienen finalidad distinta al cobro de una prestación, partiendo de la existencia del derecho en cabeza del autor y que está soportado en documento proveniente del deudor, siendo este exigible, como lo dispone el artículo 422 del estatuto ritual civil vigente, que reza: "Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él", o aquellas impuestas en actos administrativos o jurisdiccionales, e incluso por la confesión obtenida mediante interrogatorio de parte (artículo 184, ibídem).

Siendo criterio de esta autoridad el deber oficioso del Juez, al momento de proferir sentencia o auto que ordena continuar la ejecución en el proceso ejecutivo, revisar el cumplimiento de los requisitos formales y de fondo de la orden de pago proferida, conclúyase para el sub lite la idoneidad de los mismos, pues como se dijo, en el documento presentado para la exigencia forzosa del cumplimiento de la obligación, aparecen cumplidos todos los requisitos formales de existencia y validez de los títulos ejecutivos, estando incorporados las obligaciones expresas, claras y exigibles impuestas a los deudores mediante providencia judicial, de pagar al ejecutante las cantidades de dinero que allí aparecen, valores por los cuales se libró el mandamiento de pago y que según lo afirmado por el actor, no le han sido canceladas, siendo actualmente exigibles.

orden de seguir adelante

3. Según el artículo 440 del Código General del Proceso, si vencido el término, el ejecutado no excepciona, por auto se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma ordenada.
4. Teniendo en cuenta que el mandamiento de pago se encuentra ajustado a derecho, los demandados no alegaron excepciones dentro del término legal concedido, corresponde dar aplicación a tal mandato legal.

Por ello el JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO de Cali Valle,

RESUELVE:

PRIMERO. Seguir adelante la ejecución para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento de pago proferido en el presente asunto a favor de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en contra de los demandados MARÍA MAGDA TANGARIFE, ALCIDES MORENO, REYNALDO DE JESUS MORENO TANGARIFE y EDWIN MORENO TANGARIFE.

SEGUNDO. De conformidad con el Art. 446 del C.G.P., ordénese la liquidación del crédito.

TERCERO. Ordénese el avalúo de los bienes que fueron embargados, secuestrados, los que se llegaren a embargar y secuestrar y posterior remate de los mismos.

CUARTO. Condénase en costas procesales a la ejecutada. Líquidese por Secretaría conforme a los artículos 365 y 366 del C.G.P.


QUINTO. Una vez se encuentre en firme la liquidación de costas, remítase el proceso al Juzgado Civil del Circuito de Ejecución que corresponda por reparto, previa verificación de la existencia de depósitos judiciales en la cuenta de este Despacho asociados al proceso, de conformidad con el Acuerdo No. PCSJA17-10678 de mayo 27 de 2017, del Consejo Superior de la Judicatura. Anéxese copia del reporte general de depósitos judiciales en tal sentido.

NOTIFÍQUESE



CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA
JUEZ

05 / A.I.

JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI EN EL ESTADO No. 64 EN LA FECHA, Mayo 7 de 2018 NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL AUTO ANTERIOR, SIENDO LAS 8:00 AM.  CAROLINA MARIA AVILA RENGIFO SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103014-20020011400

Santiago de Cali, Valle del Cauca, diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).-

De conformidad con el numeral cuarto del auto que ordena seguir adelante la ejecución (fl.4), se hace necesario fijar las agencias en derecho conforme al Acuerdo 10554 de 2016. , el Juzgado, **DISPONE:**

FIJAR como agencias en derecho la suma de \$120.000, para ser tenidas en cuenta al momento de realizar la liquidación concentrada de costas conforme al artículo 366 del C.G.P.

CÚMPLASE,

CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA
JUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103014-20020011400

Santiago de Cali, Valle del Cauca, diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).-

CONCEPTO	FOLIOS	CUADERNO	VALOR
Agencias en derecho	5	4	\$120.000

No existen otros valores legalmente comprobados

TOTAL COSTAS PROCESALES: \$120.000

SON: CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE, a cargo de la parte ejecutada.

NATHALIA BENAVIDES JURADO
Secretaria

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103014-20020011400

Santiago de Cali, Valle del Cauca, diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).-

Teniendo en cuenta que la liquidación de costas efectuada por secretaria que obra a folio No. 6 de este cuaderno, se ajusta a los valores reales y legalmente comprobados en el proceso, este Juzgado procederá con su aprobación de conformidad a lo dispuesto en el art. 366 del Código general del proceso.

En virtud de lo expuesto, el Despacho, **RESUELVE:**

APROBAR la liquidación de costas reseñada, por encontrarse ajustada a derecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA
Juez

JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EN EL ESTADO No. 89
EN LA FECHA Junio 20 de 2018
NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL AUTO ANTERIOR, SIENDO LAS 8:00 AM.

NATHALIA BENAVIDES JURADO
SECRETARIA

Liquidación Costas

8

REPUBLICA DE COLOMBIA

Fecha : 19/06/2018
(dd/mm/aaaa)



RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

REPORTE GENERAL POR PROCESO

RADICADO No. 76001310301420020011400
CIRCUITO Civil 019 CALI (VALLE)

TOTAL REPORTE :	CANTIDAD: 0	VALOR:
-----------------	-------------	--------

Señor

JUEZ DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE CALI


E. S. D.

REFERENCIA: ORDINARIO
DEMANDANTE: MARIA MAGDA TANGARIFE - CARMENZA MORENO TANGARIFE -
JEFERSON MARTINEZ - Y OTROS
DEMANDADO: JORGE EDUARDO SAA, COOMEVA EPS S.A. Y FUNDACIÓN
VALLE DEL LILI, SEGUROS COLPATRIA S.A.

RADICACION: 200200114
ORIGEN: 14CCTO

GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.395.114 expedida en Bogotá, y portador de la tarjeta profesional de Abogado No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., dentro del proceso de la referencia, mediante el presente escrito, me permito manifestar al Despacho que autorizo como mi dependiente judicial al señor BRYAN ANDRES SOTO CAVIEDES, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No. 1143927699 expedida en Cali Valle, estudiante de derecho, para que pueda conocer y examinar los expedientes en los cuales actúo ya sea como representante de la parte actora o de la parte pasiva, quedando igualmente facultado para que retire documentos, avisos, citaciones, edictos, copias, despachos comisorios u oficios y en general realice el tramite pertinente en calidad de dependiente judicial.

Cordialmente,


GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA
CC. No. 19.395.114 de Bogotá
T. P. No.39.116 del C. S. de la J.



UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA

Personería Jurídica, Resolución 24195 del 20 de Diciembre de 1983, Mineducación
Resolución No. 501 del 7 de Mayo de 1974, Superintendencia Nacional de Cooperativas
Resolución No. 1850 del 31 de Julio de 2002, Ministerio de Educación

NIT: 860029924 - 7

Vigilada Mineducación

Cons: 214

**EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO
DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
SEDE CALI**

CERTIFICA

Que, Bryan Andres Soto Caviedes, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 1143927699 expedida en Cali, código estudiantil 300126, se encuentra matriculado (a) en el décimo semestre del programa de Derecho, Resolución de Registro calificado del Ministerio de Educación Nacional Nro. 2207 del 30 de marzo de 2010.

Período comprendido 01 de agosto de 2017 al 18 de noviembre de 2017

Créditos Académicos Matriculados 14

Tiempo de Trabajo Académico Semanal 42 Horas

Se expide en Cali el 17 de Noviembre de 2017.


CAROLINA HERRERA CASTILLO
Jefe Admisiones, Registro y Control Académico



UNIVERSIDAD
COOPERATIVA
DE COLOMBIA
CALI

DEPARTAMENTO
DE ADMISIÓN, REGISTRO
Y CONTROL ACADÉMICO

LILIANA QUIJANO TELLO

Asesora Jurídica de Responsabilidad Medica y Sanitaria

Universidad Santiago de Cali

Universidad del Rosario

Universidad Externado de Colombia

Señores

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

E.

S.

D.

JUZGADO 19
CIVIL CIRCUITO DE CALI

REF: 2002-0114

DTE: MARIA MAGDA TANGARIFE

DDO: FUNDACION VALLE DEL LILI Y OTROS

18MAR21PM2:52

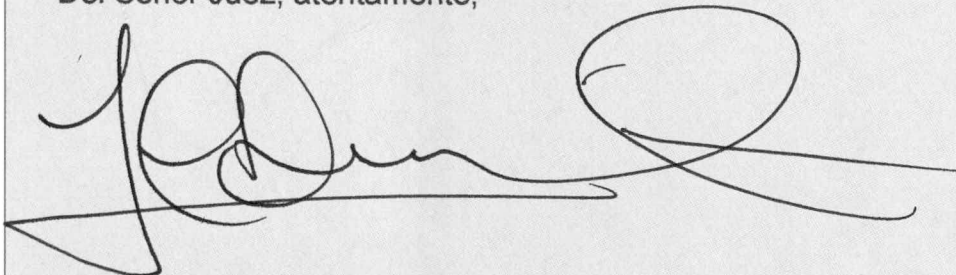
270608



AUTORIZACION GENERAL

LILIANA QUIJANO TELLO, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 31.297.101 de Cali (V), portadora de la Tarjeta Profesional No. 60.721 del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del presente escrito autorizo al Dr. **NOLBERTO VALERO PINO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No.1.144.046.088 de Cali, con el artículo 26 del decreto 196/71, para que radique oficios, retire oficios, revise el proceso de referencia y todo lo demás a lo que haya lugar, en el cual estoy reconocida como apoderada judicial de la **FUNDACION VALLE DEL LILI**.

Del Señor Juez, atentamente,



LILIANA QUIJANO TELLO

C.C. No. 31.297.101 de Cali (V)

T.P. No. 60.721. CSJ



UNIVERSIDAD DE
SAN BUENAVENTURA
CALI

Oficina de Registro Académico



SC-CER342536

EL SECRETARIO
Y LA DECANA FACULTAD DE DERECHO

CERTIFICAN

Que VALERO PINO, NOLBERTO, identificado(a) con la Cedula de Ciudadania No. 1.144.046.088 expedida en CALI, cursó y aprobó la totalidad de las asignaturas que conforman el programa de DERECHO DIURNO.

El estudiante VALERO PINO, NOLBERTO inicio su plan de estudios el día 18 de Noviembre de 2011 y termino su plan de estudios el día 08 de Junio de 2017.

Que la Universidad de San Buenaventura Cali, tiene programada Ceremonias de Grado Solemne para el día 21 y 22 de Febrero de 2017.

"Nota: Esta certificación es solo para el plan de estudios; para optar al título académico, el estudiante debe cumplir con todos los requisitos del artículo 34 del reglamento estudiantil"

1120293 VALERO PINO, NOLBERTO

Se expide en Cali, Colombia a los doce (12) días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho (2018).

FRAY ANTONIO JOSE GRISALES ARIAS, OFM
SECRETARIO
C.C. No. 15.691.449 de CALI

ALBA LILIANA SILVA DE ROA
DECANA FACULTAD DE DERECHO
C.C. 31.269.995 DE CALI

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Avenida 10 de Mayo, La Uimbria, carretera a Pance • PBX: (57) + (2) 488 22 22 • Fax: (57) + (2) 488 22 31 • Cali - Colombia, Sur América
Línea de atención gratuita 01-8000-913303 • e-mail: información@usbcali.edu.co • www.usbcali.edu.co • NIT 890 307 400-1

0005790

Scanned by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EDIFICIO ENTRECEIBAS CALLE 8 No.1-16 OFICINA 502

Santiago de Cali, 05 de julio de 2018

Oficio No. 3200

Señores

OFICINA DE EJECUCION JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
EDIFICIO ENTRECEIBAS

Ciudad

Cordialmente remito el siguiente proceso tramitado en este Despacho con Sentencia que ordena seguir adelante la ejecución (folio 4 cuaderno 8) y que resolvió según las consideraciones pertinentes en la misma providencia, enviar el expediente a la secretaria de ejecución civil del circuito de Cali para lo de su competencia.

RADICACION	76001-3103-014-2002-00114-00
CLASE DE PROCESO	EJECUTIVO A CONTINUACIÓN
DEMANDANTE	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.
DEMANDADO	MARÍA MAGDA TANGARIFE Y OTROS
MEDIDAS PREVIAS	CUADERNO NUEVE (9)
MEMORIALES	N. A.
CONSTANCIA TITULO	Folio 8 cuaderno 3 (No registra título)
CUADERNOS	NUEVE (9)
FOLIOS ÚTILES	8, 74 674, 2, 60, 15, 13, 4 y 46, folios.
Atentamente,	No recibido

NATHALIA CRISTINA BENAVIDES JURADO
Secretaria

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO

Fecha : 17/jul/2018

Página

1*

CORPORACION GRUPO REPARTO JUZGADOS CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
JUZGADOS DE EJECUCION CIRCUITO DE SENTENCIA CD. DESP SECUENCIA: FECHA DE REPARTO
REPARTIDO AL DESPACHO 003 23723 17/jul/2018

JUZ 03 CIVIL DEL CTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS

<u>IDENTIFICACION</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>APELLIDO</u>	<u>SUJETO PROCESAL</u>
29101589	MARIA MAGDA	TANGARIFE CARDONA	01 *"
31297101	LILIANA	QUIJANO TELLO	03 *"

אזהרה מנכ"ל תביעה נדרשת תביעה

CCTOREPARTO

CUADERNOS 8

dsalamnv

FOLIOS 8-74-674-2-60-15-13-

EMPLEADO

OBSERVACIONES

EJECUTIVO SINGULAR, RAD 76001-31-03-014-2002-00114-00, PRIMERA INSTANCIA, VIENE DEL
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO

29/15

JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
Santiago de Cali, veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018)

AUTO N° 2749

Demandante: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.S.
Demandado: MARÍA MAGDA TANGARIFE – ALCIDES MORENO –
REYNALDO DE JESÚS MORENO TANGARIFE - EDWIN
MORENO TANGARIFE
Radicación: 76001-3103-014-2002-00114-00

En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo No. PSAA15-10402 de 29 de octubre de 2015 emitido por el C.S. de la J., modificado y ajustado por el Acuerdo No. PSAA15-10412 del 26 de noviembre de 2015, en concordancia con la circular CSJC15-145 del 7 de diciembre de 2015, procedente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, se avocará el conocimiento del presente proceso.

Se debe advertir que el Despacho de conocimiento remitió la ejecución de la orden contenida en el numeral tercera de la sentencia No. 047 – 2017 del 26 de mayo del año 2017, por el concepto de costas generadas dentro del proceso declarativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8° del acuerdo PSAA13-9984 del 5 de septiembre de 2013, a esta Agencia Judicial tan solo le compete conocer el trámite ejecutivo, por ende se ordenará la remisión del expediente del proceso declarativo a órdenes del Juzgado cognoscente del mismo.

Por otro lado, se observa que se encuentra pendiente pronunciarse respecto de las solicitudes de dependencia judicial aportadas por los apoderados judiciales de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., y la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, de las mismas se observa que las certificaciones estudiantiles datan del periodo electivo 2017, de ahí que, como quiera que no se corrobora que en la actualidad los autorizados detentan la calidad de estudiantes, no se podrá despachar favorablemente lo pretendido.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado,

DISPONE:

1°.- AVOCAR conocimiento del presente proceso.

2°.- ORDENAR que por conducto de la oficina de apoyo se remita al Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali el presente proceso declarativo de Responsabilidad Civil Contractual, previniéndose que por conducto de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución se debe dejar copia la sentencia No. 047 – 2017 como título ejecutivo de la presente ejecución.

3°.- NEGAR las solicitudes de dependencia judicial propuesta por AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. y la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI.

NOTIFÍQUESE,
La Juez,


ADRIANA CABAL TALERO

139

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 760013103-014-2002-00114-00
SENTENCIA DE 1ª INSTANCIA No. 047-2017

Santiago de Cali, veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

I. OBJETO DE ESTA PROVIDENCIA

Proferir sentencia en el presente proceso ORDINARIO propuesto por MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA obrando en nombre propio en su condición de madre de la fallecida CARMENZA MORENO TANGARIFE y manifestando representar a sus nietos JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO; su padre ALCIDES MORENO; y sus hermanos REINALDO DE JESÚS, EDWIN, NELSON, MARITZA, ADRIANA Y MARTHA MORENO TANGARIGE; contra COOMEVA EPS S.A., la FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DEL LILI, y el médico JORGE EDUARDO SAA MADRIÑÁN, en el cual fue vinculada como llamada en garantía COMPAÑÍA ASEGURADORA COLPATRIA S.A. (hoy AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.).

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO

1. La demanda ordinaria de responsabilidad civil contractual se presenta para que se declare que existieron errores en la atención médica prestada a la señora CARMENZA MORENO TANGARIFE en el proceso de atención del parto por cesárea que se practicó el día 26 de marzo de 2000, imputables a los demandados, los cuales produjeron su deceso en la mañana del día siguiente, y que en virtud de dicha declaración, se ordene el pago solidario de los perjuicios materiales y morales discriminados así:

Por concepto de daño emergente: las sumas de \$2.000.000 por gastos funerarios y de sepelio, y de \$500.000 por transporte, papelería y demás gastos para la presentación de la demanda, sin que se discriminen los destinatarios de esta condena.

Por concepto de lucro cesante para MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA en su condición de madre, su padre ALCIDES MORENO, y sus hijos JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO, el valor de la ayuda económica que habrían de recibir de la extinta CARMENZA MORENO TANGARIFE de no haberse producido su fallecimiento, en las sumas de \$166.824.000 para los hijos, y de \$70.000.000 para los padres, que deberán ser actualizados conforme al IPC, teniendo en cuenta la edad y salario que devengaba.

Por concepto perjuicios morales subjetivos para MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA en su condición de madre, su padre ALCIDES MORENO, sus hijos JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO, y sus hermanos REINALDO DE JESÚS, EDWIN, NELSON, MARITZA, ADRIANA Y MARTHA MORENO TANGARIFE, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales a cada uno.

2. En apretada síntesis de los fundamentos fácticos de la demandada, se tiene que la señora CARMENZA MORENO TANGARIFE en su condición de afiliada a COOMEVA EPS S.A. fue atendida en la FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DEL LILI en su periodo de embarazo y en el parto que se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2000, fecha en la cual el ginecólogo obstetra JORGE EDUARDO SAA MADRIÑÁN le practicó cesárea aproximadamente a las 5:00 PM, luego de lo cual la paciente pasó a sala de recuperación en condiciones de normalidad, con reporte de sangrado genital en forma moderada. Ante la persistencia del sangrado cuyo origen no pudo ser identificado con la revisión vaginal, se decidió reintervenir por laparotomía a la paciente a través de la herida quirúrgica, encontrando hemoperitoneo -sangrado dentro de abdomen- de uno y medio litros sin ubicación del foco, decidiéndose el procedimiento de histerectomía abdominal subtotal.

Refiere el apoderado de la parte actora que en la historia clínica se anotó que la paciente en el puerperio, de 1:30 a 3:30 AM estuvo en buenas condiciones y acompañada de sus familiares, sin ser cierto esto último por cuanto ningún familiar la acompañó esa noche, en la cual, hacia las 4:45 AM tuvo que ser trasladada a la UCI debido a compromiso dinámico y distensión abdominal, momento en el que se decidió nueva cirugía de urgencia, en la que se encontró un gran hemoperitoneo de aproximadamente 2 litros y sangrado de arteria; a las 5:30 la paciente presentó muy mal estado y a las 6:10 de esa mañana falleció por paro cardio-respiratorio.

3. Como hechos generadores de la culpa refiere el mandatario actor que el médico JORGE EDUARDO SAA y el grupo de cirugía, incurrieron en deficiencia técnica quirúrgica en la segunda intervención que le realizaron a la paciente, al seccionarle una arteria, lo cual originó un sangrado constante y profuso sin adecuada reposición de sangre, pues la paciente perdió 10 unidades de sangre y solo le transfundieron 2 unidades. Además en la tercera cirugía se encontró un sangrado que duró aproximadamente dos horas, tiempo demasiado largo que devino en la consecuencia fatal. Sumado a ello, no se contó con el consentimiento de la paciente ni de sus familiares para la extracción del útero y las trompas de falopio.

4. Luego de la admisión y notificación correspondientes, los demandados dieron oportuna contestación oponiéndose a todas las pretensiones de la demanda, aceptando unos hechos, negando otros, y formulando excepciones de mérito, que se compendian así:

DEMANDADA FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DEL LILI. 1.) LA EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE CULPA DETERMINADA EN EL DECRETO REGLAMENTARIO 3380 DE 1981 POR EL CUAL SE REGLAMENTE LA LEY 23 DE 1981 EN SU ARTÍCULO 13. Sustentada sobre la base de que la institución y los médicos desplegaron todos sus conocimientos y técnica científica para restablecer la salud de la paciente, sin lograrlo por cuanto se presentó un sangrado en capas por causas endógenas y no por responsabilidad de los galenos, de modo que hay ausencia de culpa. 2.) INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. En tanto la institución prestó todos los servicios que el estado patológico de la paciente requirió, con todo el equipo humano y técnico

necesario sin lograr el objetivo por causas endógenas de la paciente, habida cuenta que la medicina no es una ciencia exacta.

DEMANDADO JORGE EDUARDO SAA. 1.) EXCEPCIÓN POR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE MEDIO. Por ser esta la naturaleza de la obligación y no de resultado, el médico está obligado a desplegar conducta diligente que fue la observada por el galeno demandado, de modo que no puede imputársele el resultado adverso al no obtenerse el resultado buscado con el tratamiento. 2.) EXONERACIÓN DEL MÉDICO POR ESTAR PROBADO QUE EMPLEÓ LA DEBIDA DILIGENCIA Y CUIDADO. Dado que el galeno empleó los medios clínicos, médicos y diagnósticos de manera oportuna, pese a lo cual se sobrevino un resultado producto del riesgo inherente al procedimiento quirúrgico. 3.) INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR AUSENCIA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CULPA. No hubo impericia, imprudencia o negligencia del especialista en ginecología, y tampoco existe nexo de causalidad. 4.) PRESENCIA DE CAUSA EXTRAÑA – CASO FORTUITO. El agravamiento de la condición de salud y la falta de éxito del tratamiento no se dan por culpa el médico sino por la idiosincrasia propia de la paciente, lo cual puede ser calificado como caso fortuito. 5.) INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD DE ACUERDO CON LA LEY. De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Dcto. 3380/81, el médico no es responsable de riesgos y resultados desfavorables de difícil previsión. 6.) EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR ESTAR ACREDITADO QUE EL PROFESIONAL MÉDICO ACTUÓ CON DISCRECIONALIDAD CIENTÍFICA. Con apoyo en doctrina y jurisprudencia que se cita, se aduce que el médico actuó en el marco de su discrecionalidad científica, sin criterios autoritarios o arbitrarios, de modo que la interferencia del médico en la causalidad propia de la patología de la paciente, no puede significarle responsabilidad. 7.) INNOMINADA.

DEMANDADA COOMEVA EPS S.A. 1.) COBRO DE LO NO DEBIDO. En tanto la EPS no es la responsable del deceso de la paciente, por ende no es la llamada a indemnizar. 2.) ATENCIÓN ADECUADA A LA PACIENTE. No hubo negligencia de la EPS ni de los prestadores en la atención de la paciente, de modo que las causas de su muerte no les pueden ser atribuibles. 3.) PRESENCIA DE CAUSA EXTRAÑA O PROPIA DE LA PACIENTE. Puesto que fue atendida con el mejor

nivel profesional, técnico y humano que no pudo evitar el resultado falta, por causas endógenas de la paciente. 4.) INNOMINADA.

5. En término oportuno se tramitó y cursó llamamiento en garantía por la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI a SEGUROS COLPATRIA S.A., quien contestó oponiéndose a la demanda y al llamamiento a través de excepciones de fondo de

6. Surtido el periodo probatorio y corrido el traslado para alegar de conclusión, solamente hicieron uso de ese derecho el médico, la EPS demandada y la llamada en garantía, insistiendo en la ausencia de prueba de los elementos estructurales de la responsabilidad médica, a la par que la llamada en garantía resalta las condiciones del aseguramiento.

III. CONSIDERACIONES

1.- Los presupuestos procesales, identificados como la capacidad para ser parte y comparecer al proceso, competencia del juez, y demanda en forma, necesarios para la formación y desarrollo de la relación jurídico-procesal, se encuentran reunidos satisfactoriamente en este proceso. Tampoco se advierte la existencia de vicios generadores de nulidad, por lo que es viable efectuar pronunciamiento de fondo sobre el litigio.

La presente sentencia se dicta con fundamento en las normas del Código de Procedimiento Civil, de conformidad con la transición prevista en el numeral 1º) del artículo 625 del Código General del Proceso, en concordancia con canon 624 del mismo estatuto que modificó el artículo 40 de la ley 153 de 1887, tratándose la primera de norma especial y posterior que aplica a los procesos ordinarios en curso que tenían alegatos surtidos al momento de la entrada en vigencia de este estatuto, tal como acontece con el presente asunto en que ya estaban surtidas las alegaciones cuando comenzó la vigencia plena del CGP en este Distrito Judicial.

2.- En cuanto a la legitimación en la causa, como presupuesto material de la pretensión, este aspecto sustancial no acusa deficiencias en lo atinente a la legitimación por activa de los demandantes MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA, en su condición de madre de la fallecida CARMENZA MORENO TANGARIFE, de su padre ALCIDES MORENO, y de sus hermanos REINALDO DE JESÚS, EDWIN, NELSON, MARITZA, ADRIANA Y MARTHA MORENO TANGARIFE, quienes acreditaron los vínculos de parentesco a través de los respectivos registros civiles de nacimiento (fls. 28 a 40 c.1), de modo que de acreditarse la responsabilidad civil deprecada, tendrían legitimación para acceder a la indemnización por los perjuicios morales que se presumirían de acuerdo al grado de consanguinidad e intensidad del daño.

No obstante, no ocurre igual con sus menores hijos -para el momento de la demanda- JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO, respecto de quienes su abuela materna MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA aduce obrar en representación, pero lo cierto es que no se trajo ninguna prueba acerca del otorgamiento de la custodia o patria potestad de los menores, ni se informa porqué los padres de ellos no ejercen la acción en su nombre, siendo que en estos últimos -LUIS FERNANDO MARTÍNEZ RIVERA, padre de JEFFERSON, y ALEXANDER AYALA GARCÍA, padre de VALENTINA Y CARMENZA ISABELLA-, a falta de prueba que informe lo contrario, recae la potestad de representación de sus hijos. En este orden, hay carencia de legitimación por activa, en torno a la cual habría necesidad de decretar prueba de oficio en acogimiento a la primacía de los derechos de los niños consagrada en el artículo 44 de la Constitución Política, pero únicamente en el evento en que resultare útil tal acreditación por la viabilidad de las pretensiones.

3.- Con respecto a la legitimación por pasiva, por estar demandadas la EPS, la IPS y el médico especialista por cuya cuenta se prestó la atención del parto a la señora MARÍA MAGDA TANGARIFE CARDONA que devino en su lamentable deceso, no hay duda del cumplimiento del requisito sustancial, no obstante que habrá de precisarse que la acción ejercida es la extracontractual de acuerdo a los hechos, pretensiones y contenido de la demanda, pese a que la prestación de tales servicios se hizo dentro del marco contractual de la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.

4.- Conforme a lo anterior, el problema jurídico de la instancia se contrae a determinar a partir de las pruebas recaudadas en el proceso, si están o no acreditados errores en la atención médica brindada por los demandados a la fallecida señora MORENO TANGARIFE, que puedan dar pábulo a la responsabilidad civil enrostrada.

5.- Respecto al tipo de responsabilidad civil a cargo de las entidades que integran el extremo pasivo, la H. Corte Suprema de Justicia ha definido con exactitud la naturaleza, contractual o extracontractual de la responsabilidad civil, aplicable en casos similares al que es materia de estudio:

"Aplicada la citada doctrina jurisprudencial, del análisis lógico, sistemático, integral, fundado y razonable de la demanda no obstante calificar de contractual la responsabilidad civil, a simple vista refulge el reclamo por los demandantes de la reparación de sus propios daños, esto es, actúan iure proprio, piden para sí y por sí perjuicios personales por la muerte de la víctima directa (pretensiones declarativas y de condena, hechos primero a noveno, estimativo de perjuicios materiales (fls. 34-37, cdno. 1).

Justamente, la conjugación de esas circunstancias, y la interpretación de la demanda, patentiza que la responsabilidad suplicada por los demandantes mediante el ejercicio de la acción iure proprio, "es extracontractual", por tratarse de terceros ajenos al vínculo, quienes no pueden invocar el contrato para exigir la indemnización de sus propios daños "con el fallecimiento de la víctima-contratante, debiendo situarse, para tal propósito, en el campo de la responsabilidad extracontractual" (cas. civ. sentencia de 18 de mayo de 2005, [SC-084-2005], exp. 14415)."

En este orden de ideas, queda claro que la indemnización de los perjuicios reclamada por la persona afectada con la prestación del servicio se le aplica la responsabilidad civil contractual, sin embargo cuando se trata de terceros, en este caso los padres y hermanos de la paciente fallecida, el tipo de responsabilidad aplicable al caso ha de ser la extracontractual.

Resulta preciso asentar que de acuerdo a lo consignado de manera general en la doctrina y la jurisprudencia, la responsabilidad contractual tiene su origen en la celebración de un contrato o acuerdo de voluntades; el origen entonces, se encuentra en el contrato como fuente de obligaciones, en los términos que indican los artículos 1602 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a la llamada responsabilidad civil extracontractual el pilar se encuentra constituido en la legislación colombiana en el artículo 2341 del C.C., al

establecer: *"El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido".*

Sin embargo, debe tenerse presente que ambas tipologías de responsabilidad, requieren para su conformación la demostración de tres elementos básicos: daño, hecho generador culposo, y nexo causal que permita imputar el daño a la conducta del demandado.

Es preciso aclarar que la responsabilidad de la EPS se deriva del acto o servicio prestado indebidamente por su IPS a través del personal médico que la asiste, por aquello de la "responsabilidad solidaria" por el insuceso, entre la E.P.S. y la I.P.S., la cual se desprende de los artículos 161 y 178-6 de la Ley 100 de 1993. Sobre esta temática, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en uno de sus apartes señaló:

"...las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son responsables de administrar el riesgo de salud de sus afiliados, organizar y garantizar la prestación de los servicios integrantes del POS, orientado a obtener el mejor estado de salud de los afiliados, para lo cual, entre otras obligaciones, han de establecer procedimientos garantizadores de la calidad, atención integral, eficiente y oportuna a los usuarios en las instituciones prestadoras de salud (art. 2º, Decreto 1485 de 1994).

"(...) a no dudarlo, la prestación del servicio de salud deficiente, irregular, inoportuna, lesiva de la calidad exigible y de la lex artis, compromete la responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud y prestándolos mediante contratación con Instituciones Prestadoras de Salud u otros profesionales, son todas solidariamente responsables por los daños causados, especialmente, en caso de muerte o lesiones a la salud de las personas." SALA DE CASACIÓN CIVIL Magistrado Ponente: WILLIAM NAMÉN VARGAS. Sent. de 17 de noviembre de dos mil once (2011). Ref: 11001-3103-018-1999-00533-01.

También la Corte Constitucional se ha referido a dicha responsabilidad en la sentencia T-137 A de 2013:

"El artículo 2341 del Código Civil prevé, que aquel que ha cometido con culpa un daño a otro esta obligado a indemnizar los perjuicios que se deriven de ello, estableciendo así el régimen de responsabilidad extracontractual. Por su parte, la responsabilidad civil puede ser considerada contractual o extracontractual dependiendo de: i) la relación jurídica entre las partes de la cual se deriva el daño – si es o no preexistente al daño –, ii) la acción que ejerce el demandante/victima y/o la familia perjudicada, para reclamar la indemnización de perjuicios.

Por su parte, la responsabilidad médica deviene de la obligación, en principio contractual, del médico, EPS o IPS de cuidar la integridad corporal del paciente para devolverlo sano y salvo al concluir la relación prestación de un servicio médico, esta relación puede surgir, generalmente, como consecuencia de una convención.

*En este orden de ideas, la obligación de los prestadores de servicios médicos consiste en proporcionar al paciente todas las herramientas curativas de las que disponga, según la *lex artis*, para curar a un paciente. Por ello, en principio, salvo pacto en contrario y dependiendo del caso en concreto, responden solidariamente las entidades prestadoras de salud, las instituciones prestadoras de servicios y el personal médico, de la producción de daños causados con ocasión a actos médicos concurrentes; que en uno y otro caso depende de que el daño haya surgido de un incumplimiento contractual –responsabilidad contractual- o por la violación al deber genérico de no dañar –responsabilidad extracontractual.*

No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que cuando se demanda a la persona jurídica –E.P.S, I.P.S– para el pago de los perjuicios causados con ocasión a un servicio médico, por el hecho culposo de sus subalternos, responde directamente por los actos de sus dependientes a la luz de los artículos 1738 o 2347 C.C. Lo anterior, no implica que en el ejercicio de la prestación del servicio médico, el profesional de la salud no responda por su no actuar con pericia, cuidado y diligencia, propios de la profesión.”

En este orden de ideas resulta claro que la prestación de los servicios de salud garantizados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), no excluye la responsabilidad legal que les corresponde cuando los prestan por intermedio de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) o de profesionales mediante contratos celebrados entre estos para la prestación del servicio. Por lo tanto, no cabe duda que la prestación deficiente, irregular, inoportuna, dañosa, alejada de la calidad exigible y de la *lex artis*, compromete la responsabilidad civil de las Entidades Prestadoras de Salud indistintamente que la falla se haya generado por una deficiente praxis médica por los galenos o por una inadecuada prestación del servicio de la IPS. Este es el parámetro decisonal de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia con carácter de doctrina probable, que expresamente se acoge para esta decisión.

6.- Ya en materia concreta de la responsabilidad civil médica por defectuosa prestación del servicio, que es la que aquí se estudia porque no es de aquellos casos en que el galeno se compromete a un resultado específico -como puede acontecer con algunas cirugías estéticas- según lo tiene determinado la jurisprudencia, es premisa indiscutida que la obligación del médico frente a su paciente es una obligación de medio, en virtud de la cual el primero se obliga con el segundo a prestar toda la diligencia y cuidado de la ciencia médica en procura de la mejoría de la salud sin garantizar un resultado concreto, por ende en este tipo de responsabilidad al paciente le corresponde probar la culpa del médico.

Debe entonces el médico emplear todos los medios a su alcance para mejorar la salud del paciente, de ahí que sea necesario examinar cómo lo atendió, con miras a determinar si aplicó los conocimientos y los procedimientos necesarios disponibles para su recuperación. Esto es lo que se conoce como la *lex artis*, que a decir de la Corte Suprema de Justicia es:

"la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la Medicina 'Lex artis ad hoc', debe tener en cuenta 'las especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente y, en su caso, de la influencia en otros factores endógenos –estado e intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma organización sanitaria-, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica normal requerida (derivando de ello tanto el acervo de exigencias o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia de los servicios prestados y, en particular, de la posible responsabilidad de su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico ejecutado); (cas. civ. sentencia de 30 de enero de 2001, exp. Corte 5507).

Es claro que en este tipo de responsabilidad, la carga probatoria de la culpa, de manera general recae en la parte demandante a menos que la ley disponga de manera diferente o que el médico se haya comprometido con un resultado particular porque la naturaleza de la intervención lo posibilite. No obstante, en las decisiones más recientes, la Corte Suprema de Justicia ha resaltado la dinamicidad de la carga de la prueba, teniendo en consideración novedosos, aunque discutidos parámetros interpretativos, a la luz de los cuales consignó:

"De lo expuesto surge que ante el requerimiento de definir la responsabilidad de un profesional de la medicina o del establecimiento hospitalario, la carga probatoria tendiente a acreditar los elementos de la misma queda subsumida, en línea de principio, en las reglas generales previstas en los artículos 1604 del C.C. y 177 del C. de P.C., en otros términos, debe ser asumida por parte del actor. No obstante, como lo ha venido señalando la jurisprudencia, a quien, en últimas, le corresponde acometer ese compromiso es aquel litigante que esté en mejores condiciones para la acreditación del hecho a probar (carga dinámica de la prueba), determinación a cargo del funcionario, según su criterio, aunque referido a circunstancias objetivas que develen la real posibilidad de que una u otra parte sea la llamada a ejercer ese rol. (Cas. civ. Sentencia de 15 de sept./16, exp. SC-129472016 M.P. Dra. Margarita Cabello Blanco)".

7.- En dirección a verificar la admisibilidad del reclamo bajo la óptica de la responsabilidad civil en la especie que se estudia, en contra del médico, la EPS y la IPS demandados, resulta necesario tener en cuenta que la parte demandante se ocupó de precisar sus reproches a la atención brindada a la señora CARMENZA MORENO TANGARIFE, en cuyo desarrollo en el acápite rotulado como hechos generadores de la culpa (fls. 11 a 13 c.1), enrostra "deficiencia en la TÉCNICA QUIRÚRGICA en la penúltima cirugía que le realizaron al cortar una arteria que

1

conllevó un sangrado constante y profuso y sin una adecuada reposición de la sangre perdida", señalando que pese a que se encontró un sangrado de arteria en el pedículo vascular del anexo izquierdo, se dejó pasar aproximadamente dos horas, tiempo demasiado largo que devino en la consecuencia fatal, en el que no se le transfundió la cantidad de sangre necesaria; también endilga que no hubo consentimiento para la ligadura y extracción del útero.

Estando por consiguiente precisadas las hipótesis de errores médicos a partir de las cuales se sustentan las pretensiones, se procede al examen de las pruebas para efectos de determinar si fueron o no acreditados tales desapegos a los deberse de conducta y cuidado, que pudieran configurar la pretermisión de la *lex artis*.

Con respecto al reproche atinente a la falta de autorización para la ligadura de trompas, se tiene el documento en el cual se plasmó el consentimiento informado de la paciente, signado por ella y por el médico especialista JORGE EDUARDO SAA (fl. 149 c.1), en el cual se describen la cirugía de cesárea y la ligadura con la técnica de Pomeroy, junto con sus riesgos más importantes, de hemorragia, infección y lesión de [vías o palabra no entendible] adyacentes. Por consiguiente, de entrada se aprecia la carencia de fundamento del reclamo.

Igual ocurre en relación con la histerectomía que se le practicó, pues también se trajo documento signado por la paciente y el especialista (fl. 148 ib.), en el que se consigna el procedimiento de revisión de cavidad uterina y probablemente laparotomía exploratoria, en el que se dejó anotado en riesgos, los de "*Hemorragia severa, infección y posibilidad de realizar histerectomía [palabra sobre escrita e ilegible]*".

Bien se comprende a partir de la revisión de los antedichos documentos, que no fueron tachados ni redargüidos pese a que el apoderado de los demandantes se pronunció respecto de las tres contestaciones a la demanda (fls. 349 a 355 ib.), que tanto la ligadura de trompas como la histerectomía que se le realizaron a la señora CARMENZA MORENO TANGARIFE fueron procedimientos autorizados por ella misma, habida cuenta de su expresa anotación en orden al consentimiento informado, amén que en los dos consta la autorización para la realización de los procedimientos complementarios que sean necesarios o

convenientes a juicios de los profesionales que los lleven a cabo. De este modo, queda entonces sin sustento la culpa galénica por carencia o ausencia de consentimiento para los precitados procedimientos quirúrgicos.

En suma a lo anterior, según viene de verse, el riesgo de hemorragia severa está expresamente contemplado en el consentimiento informado para la intervención quirúrgica exploratoria que se le realizó a la paciente, en la cual se imputa la sección o corte de la arteria; y también estaba consignado el riesgo de hemorragia para la cirugía de cesárea. Por consiguiente, no cabe afirmar que se trataba de un riesgo no previsto o no advertido de antemano a la paciente.

8.- Aclarado lo anterior, se procede al examen de las pruebas en torno a las recriminaciones de deficiencia quirúrgica al seccionarle a la paciente una arteria en la penúltima cirugía, la larga espera para ser reintervenida, y el suministro deficiente de unidades de sangre pese al sangrado profuso.

Como elementos de convicción además de los documentos de historial de atención clínica se tienen los siguientes:

Interrogatorio del ginecólogo demandado SAA (fls. 1 a 4 c.3). Los testimonios de: especialista en cirugía ALBERTO FEDERICO GARCÍA MARÍN, quien participó en la evaluación de la paciente tras la cirugía de histerectomía (fl. 6 c. 4.); especialista ginecólogo OMAR HERNAN RESTREPO FORERO, quien participó en la histerectomía de la paciente (fls. 9 a 11 c.4); ADRIANA MARTÍNEZ PEÑA, médica general que consultó a la paciente antes de la histerectomía (fls. 1 a 3 c.5.); MARCELA GRANADOS SÁNCHEZ, especialista en medicina interna y cuidados intensivos quien atendió a la paciente en la UCI (fls. 1 a 3 c.6); JUAN GERARDO CARDONA VANEGAS, anestesiólogo que asistió la cirugía de histerectomía y recuperación de la paciente (fls. 9 a 31 c.6); MARÍA DEL PILAR OLIVEROS, especialista en medicina interna y cuidados intensivos que asistió a la paciente en la UCI antes de su fallecimiento. Y la prueba pericial rendida por la especialista ginecobstetra ALBA LUCÍA VALENCIA DE ZULUAGA (fls. 441 a 445 c.1), con la complementación del también ginecobstetra JULIO CÉSAR MESA VÁQUEZ (fls. 512 a 515 c.1).

Como hechos indiscutidos y concordantes con los documentos traídos con la demanda y contestaciones, se tiene que la señora CARMENZA MORENO TANGARIFE ingresó a la IPS Clínica Valle del Lili por cuenta de Coomeva EPS el día 26 de marzo de 2000 en las horas del mediodía, habiendo presentado expulsión del tapón mucoso, en virtud de lo cual fue transferida a la sala de partos, programándose la cesárea que se le practicó por el gineco obstetra JORGE EDUARDO SAA MADRIÑÁN aproximadamente a las 5:00 PM. En la intervención se le realizó ligadura de trompas con la técnica de Pomeroy, no presentando complicaciones la madre ni el bebé.

A las 8:40 PM de ese día se deja anotación en la historia clínica de paciente que continúa con sangrado, se realiza masaje para extracción de coágulos y se tiene útero contraído a nivel umbilical. Según la nota clínica de las 9:30 PM el especialista tratante decide suministrar a la paciente Quercetol + Cytotec, no habiéndosele aplicado el primero por inexistencia en la farmacia. A las 10:25 PM el tratante revisa con espéculo a la paciente, le extrae abundantes coágulos y al observar sangrado continuo decide pasarla a cirugía con anestesia (fl. 144 c.1).

Según la hoja quirúrgica de la dirección de enfermería, el procedimiento de revisión de cavidad se da con la llegada de la paciente al quirófano a las 10:50 PM, inicia la anestesia a las 11:55 PM y comienza la cirugía a las 11:00 PM, la cual termina a la 1:15 AM del día 27 de marzo. Se deja anotación de procedimientos de legrado, laparotomía e histerectomía, con anotación 2.500 mililitros eliminados de sangre, suministro de 900 ml de concentrado eritrocitos, y 6.500 ml en soluciones EV. También se anota que la paciente estuvo hemodinámicamente estable durante el procedimiento (fl. 165 ib.).

En el informe de resumen de egreso de la paciente elaborado por el especialista SAA, se consigna que en la intervención por laparotomía a la paciente a través de la herida quirúrgica, se encontró hemoperitoneo de uno y medio litros con sangrado en capa sin ubicación del foco -pese a que en la anotación de descripción quirúrgica el galeno anota 500 c.c. (fl. 161ib.)-, decidiéndose el procedimiento de histerectomía abdominal subtotal. Con el concurso del cirujano de turno y otro ginecólogo se empaqueta el abdomen, se sacan las compresas y al verificar que no hay sangrado se procede al cierre, presentando la paciente evolución favorable en

el aspecto hemodinámico (fls. 155 y 156 ib.), anotaciones estas que en lo esencial coinciden con las de la historia clínica (fls. 144 y 145 ib.) y también con lo narrado en los hechos de la demanda.

9.- Refiere el apoderado de la parte actora que en la historia clínica se anotó que la paciente en el puerperio, de 1:30 a 3:30 AM estuvo en buenas condiciones y acompañada de sus familiares, sin ser cierto esto último por cuanto ningún familiar la acompañó esa noche, en la cual, hacia las 4:45 AM tuvo que ser trasladada a la UCI debido a compromiso dinámico y distensión abdominal, momento en el que se decidió nueva cirugía de urgencia, en la que se encontró un gran hemoperitoneo de aproximadamente 2 litros y sangrado de arteria; a las 5:30 la paciente presentó muy mal estado y a las 6:10 de esa mañana falleció por paro cardio-respiratorio.

En lo que tiene que ver con la compañía a la paciente, no hay anotaciones en historia clínica de tal circunstancia, pero tampoco trajo la parte actora ningún elemento de convicción a partir del cual pudiera auscultarse tal situación, habida cuenta que no se decretaron los testimonios que pidió por tratarse de las partes del proceso. En ese orden, es carente de prueba la afirmación de tal incorrección en cuanto a los familiares que acompañaban a la paciente, aunque aún de ser cierta, tampoco ello es trascendente de cara a las fallas que se imputan.

10.- Con respecto al corte accidental de una arteria como error quirúrgico que devino en la hemorragia incontenida de la paciente, el especialista en cirugía ALBERTO FEDERICO GARCÍA MARÍN, profesional con alta acreditación quien participó en la evaluación de la paciente tras la cirugía de histerectomía efectuada por el ginecólogo SAA y el cirujano RESTREPO, en su declaración se ocupó de explicar que dicha intervención se hace mediante la separación del órgano de las estructuras pélvicas, para lo cual se interrumpen cuatro arterias con sus venas, aclarando que no encontró "*ninguna lesión inadvertida de alguna estructura vascular diferente a las que rutinariamente deben ser interrumpidas en la histerectomía*", aseveración que coincide con la del ginecólogo OMAR HERNAN RESTREPO FORERO, y de manera general con lo declarado por todos los galenos que rindieron testimonio referidos en el acápite 8.), quienes explican que el sangrado luego de la histerectomía es uno de los riesgos inherentes y usuales de dicho procedimiento, habida cuenta que no se dijo por

ninguno de ellos y tampoco por los peritos, que se hubiera encontrado un corte arterial o venoso que no obedeciera a los que son necesarios para dicha cirugía, quedando claramente explicado por los médicos, que el sangrado suele presentarse por el problema de coagulación o coagulopatía, punto sobre el cual la especialista intensivista MARCELA GRANADOS expresó que *"las maternas son un grupo especial de pacientes puesto que el embarazo y la placenta liberan sustancias que activan tanto la coagulación como la fibrinólisis - degradación de las redes de fibrina formadas en el proceso de coagulación sanguínea- y cuando en la balanza de la coagulación la fibrinólisis pesa más, la manifestación clínica es sangrado que muchas veces es fatal como en este caso."*

Igual acontece con el número de unidades de sangre o glóbulos rojos que se le aplicaron a la paciente, pues de manera general son coincidentes los testigos de las diferentes especialidades, en cuanto a que el suministro de sangre o transfusiones sanguíneas vienen siendo restringidos en la medida del avance de la medicina, por los riesgos que involucran para los pacientes, pero en el caso de la paciente MORENO TANGARIFE se aplicaron cinco unidades de glóbulos rojos, , lo cual corresponde a la correcta indicación de acuerdo a la patología que ella presentaba, tal y como lo señaló la misma especialista GRANADOS (fl. 2 c.6) y los demás galenos al ser preguntados sobre el mismo tópico, no siendo cierto ni posible que perdiera diez unidades como lo explica el anestesiólogo CARDONA VANEGAS (fls. 19 c.6).

Tampoco hay manifestación alguna de los testigos, quienes fueron la médica general y los especialistas que tuvieron bajo su cuidado a la paciente, a partir de la cual haya lugar a pensar que la tardanza de dos horas, que el demandado SAA refiere en el resumen de egreso corresponde al puerperio luego de la histerectomía subtotal de emergencia que culminó a la 1:30 AM del día 27 de marzo (fl. 156 c.1), se trate realmente de un descuido de la paciente tal y como que lo imputan demandantes y que devino en la consecuencia fatal.

En esta dirección, resulta necesario reparar que todos los testigos del proceso fueron contestes al señalar que la atención de la paciente quien presentaba riesgo adicional por tratarse de una tercera cesárea, corresponde a la esperada de acuerdo a las condiciones que ella presentaba, tanto en cuanto a los procedimientos que se efectuaron, como a la temporalidad en que estos se llevaron a cabo, aspecto sobre el cual el anestesiólogo CARDONA

VANEGAS que asistió las cirugías, reseñó que a su cargo estuvo la remisión a la unidad de ginecobstetricia por encontrar a la paciente "*alerta, con signos vitales estables...con un sangrado moderado en control*" luego de la histerectomía subtotal, que dejó instrucciones concretas de cuidar los parámetros de tensión y saturación arterial, frecuencia cardíaca y respiratoria, de modo que cuando la médica general MARTÍNEZ observó dichos criterios, lo llamó siendo las 4:00 AM, momento en el cual se ordena la trasfusión de otras dos unidades de glóbulos rojos -adicionales a los tres que se le habían suministrado en la cirugía previa- y la inmediata remisión a la UCI (fls. 9 a 31 c.6), todo lo cual se compadece con lo relatado por el especialista demandado SAA en la nota de egreso que se viene refiriendo y en la historia clínica.

En este orden de ideas, tampoco tiene soporte la aseveración de tardía o inoportuna atención de la paciente, con más veras porque varios de los declarantes, especialistas con altas acreditaciones académicas y de experiencia, expresaron la imposibilidad de determinar o advertir con antelación un evento de diátesis hemorrágica CDI o coagulopatía, pues solo existen medidas para contrarrestarla, que fueron las que en el caso que se estudia se implementaron sin que se hubiera llegado a un resultado satisfactorio, pero no por fallas en la prestación a cargo del equipo humano y técnico que la atendió, sino por el riesgo connatural al procedimiento de cesárea y los subsiguientes que se le realizaron a la paciente.

11.- Siendo suficiente lo declarado por los médicos para concluir que no hay errores en la atención de la paciente y que su deceso se produjo por la lamentable concreción del riesgo de hemorragia que no pudo ser controlada pese a los ingentes intentos de los médicos de las variadas especialidades, tales hipótesis hayan plena correspondencia con lo concluido en los dictámenes recibidos en el proceso, que no fueron objetados y cuentan con la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, que permiten otorgarles mérito persuasivo en concordancia con lo previsto en el artículo 2441 del CPC y las restantes pruebas que vienen de analizarse.

Al efecto, la perito ginecobstetra ALBA LUCÍA VALENCIA DE ZULUAGA con respecto al caso presentado por la señora MORENO TANGARIFE, a partir de la

revisión de la historia clínica, a la par que destaca todos los riesgos que se generan tras una cesárea, expresa que *"se utilizaron los recursos farmacológicos y mecánicos existentes y finalmente como medida salvadora, como era de esperarse se recurrió a la histerectomía"*, además refiere que *"en el momento en que su estado hemodinámico se deterioró fue transfundida, lo que significa que se respetó el concepto de transfusión inmediata"* (fls. 441 a 445 c.1).

Por su parte el también ginecobstetra JULIO CÉSAR MESA VÁQUEZ quien efectuó la complementación del dictamen dado que la primera no pudo ser ubicada por no laborar para la misma entidad, también fue contundente al señalar que *"las conductas fueron adecuadas, oportunas, por personal idóneo en instalaciones habilitadas para tales casos"*; reflexión que estuvo acompañada de la explicación de los factores de riesgo de hemorragia que son connaturales a la cesárea, pero que para el caso de la señora MOREN TANGARIFE estaban incrementados por sus dos cirugías previas, su obesidad, peso del recién nacido cercano a la macrosomía fetal, sin que encontrara en su estudio vestigio alguno de sección accidental de arteria a causa del procedimiento quirúrgico de histerectomía, dejando saber que *"la secuencia de eventos practicadas (sic) a la paciente en el año 2000 están en consonancia con los mismos protocolos descritos para el año 2012"*, amén que la coagulopatía o CDI fue la causa de la muerte de la paciente por cuanto le causó el shock hipovolémico y el paro cardiorrespiratorio, pero dicha patología que se presenta tras hemorragias masivas *"aún en la actualidad tiene desenlaces fatales en los mejores centros de atención crítica"* (fls. 512 a 515 c.1).

12.- Todo lo anterior es suficiente para comprender, siguiendo los parámetros jurisprudenciales explicitados en precedencia, que el resultado del lamentable fallecimiento de la paciente, no puede ser atribuido a los errores de atención médica que se imputan, como tampoco se acreditó que existiera negligencia, impericia o imprudencia, de suyo que no están presentes en este caso los elementos de nexo causal y culpa, necesarios para predicar la existencia de responsabilidad médica, y dicho tiene la doctrina y la jurisprudencia que *"si el interesado en dar la prueba no lo hace, o la da imperfectamente, o se descuida, o se equivoca en su papel de probador, necesariamente ha de esperar un resultado adverso"*

a sus pretensiones"¹, que es claramente lo que en este evento aconteció en que los actores no probaron pretermisión de la *lex artis ad hoc*, como se requiere con miras a la prosperidad de este tipo de pretensiones.

13.- Corolario necesario de lo que viene de exponerse, es que las excepciones de mérito formuladas por los demandados tendientes a desacreditar la responsabilidad médica, según fueron compendiadas en el acápite respectivo, hallan completo acomodo en lo que resultó probado en el proceso, de modo que habrán de declararse probadas, por ende, intrascendente resulta la alusión a la legitimación de JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO para el momento de la demanda antes explicada, salvo para eximirlos de la condena en costas por dicha falta de legitimación, no hay lugar a estudiar la relación de llamamiento en garantía y tampoco tiene cabida la sanción por juramento estimatorio, habida cuenta que no existía tal deber en el ordenamiento patrio para este tipo de procesos, de acuerdo al momento en que se formuló la demanda.

Consecuentemente se denegarán la totalidad de pretensiones de la demanda con la correspondiente condena en costas a cargo de los demandantes y a favor de los demandados y la llamada en garantía, con graduación de agencias en derecho de acuerdo a los artículos 392 y 393 de la misma codificación, en concordancia con el Acuerdo 1887 de 2003 de la Sala Administrativa del C. S. de la J.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE:

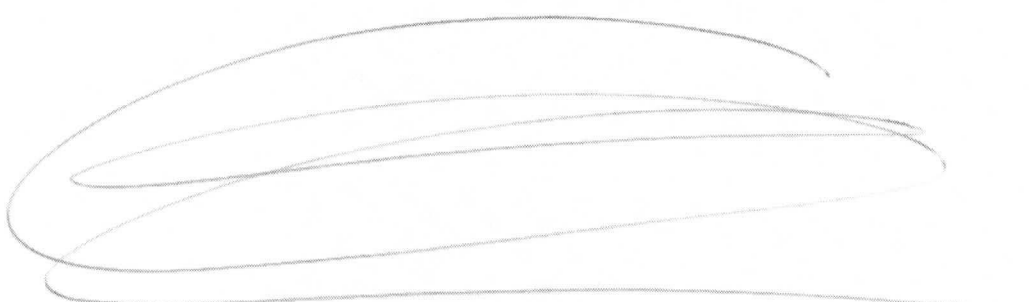
PRIMERO: Declarar probadas las excepciones formuladas por los demandados y la llamada en garantía, tendientes a desacreditar los elementos estructurales de la responsabilidad médica.

¹ Cas. Civil. C.S.J. Sent. Del 30 de junio de 2009, f. exp. 1100102030002009-01044-00.

SEGUNDO: En consecuencia, se niegan todas las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Condenar en costas a los demandantes salvo a JEFERSSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO, a favor de los demandados y la aseguradora llamada en garantía en igual proporción. Liquidense por secretaría e inclúyase en la liquidación a practicar la suma de \$4.740.000 por concepto de agencias en derecho.

NOTIFÍQUESE



CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA

JUEZ

JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EN EL ESTADO No. 074

EN LA FECHA, 30 DE MAYO DE 2017
NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL AUTO
ANTERIOR, SIENDO LAS 8:00 AM.



CAROLINA MARÍA AVILA RENGIFO

SECRETARIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 76001-31-03-014-2002-00114-00

SANTIAGO DE CALI, 23 DE JUNIO DE 2017

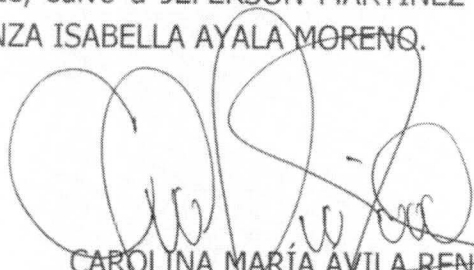
Santiago de Cali, Valle del Cauca, veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017).-

CONCEPTO	FOLIOS	CUADERNO	VALOR
Agencias en derecho	669	1	\$4.740.000

No existen otros valores legalmente comprobados

TOTAL COSTAS PROCESALES: \$4.740.000

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE, a cargo de la parte demandante, salvo a JEFERSON MARTÍNEZ MORENO, VALENTINA AYALA MORENO y CARMENZA ISABELLA AYALA MORENO.


CAROLINA MARÍA AVILA RENGIFO
Secretaria

27
671

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
RAD: 76001-31-03-014-2002-00114-00

SANTIAGO DE CALI, 23 DE JUNIO DE 2017

Santiago de Cali, Valle del Cauca, veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017).-

Teniendo en cuenta que la liquidación de costas efectuada por Secretaría que milita a folio No.670 de este cuaderno, se ajusta a los valores reales y legalmente comprobados en el proceso, este Juzgado procederá con su aprobación de conformidad a lo dispuesto en el art. 366 del Código general del proceso.

En virtud de lo expuesto, el Despacho, **RESUELVE:**

PRIMERO: Aprobar la liquidación de costas reseñada, por encontrarse ajustada a derecho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS EDUARDO ARIAS CORREA
Juez

JUZGADO 19 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
EN EL ESTADO No. 90
EN LA FECHA, 27 JUNIO 2017
NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL AUTO
ANTERIOR, SIENDO LAS 8:00 AM.
CAROLINA MARIA ÁVILA RENGIFO
SECRETARIA

28
674

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



DISTRITO JUDICIAL DE CALI
JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI

CERTIFICA

Que en el proceso propuesto por María M Tangarife y Otros contra COOMEVA EPS y otros, se profirió sentencia No 047 de fecha 26 de mayo de 2017, notificada por estado de fecha 30 de mayo de 2017, encontrándose la misma ejecutoriada, sin que ninguna de las partes hubiera propuesto recurso alguno contra la misma.

Dada en Cali, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017).

CAROLINA MARÍA ÁVILA RENGIFO
Secretaria



[Firma manuscrita]
J. H. Hernández
1144 055684
27-09-17



**OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI**

CONSTANCIA SECRETARIAL

Santiago de Cali, agosto diecisiete (17) de dos mil dieciocho (2018)

Expediente: 76001-3103-014-2002-00114-00

En atención a lo ordenado mediante el numeral 2º del Auto No. 2749 de julio veintisiete (27) de dos mil dieciocho (2018), se informa que de la Sentencia de Primera Instancia No. 047-2017, proferida por el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Santiago de Cali en mayo veintiséis (26) de dos mil diecisiete, se deja copia en el presente cuaderno ejecutivo, la cual es fiel reproducción de la original.

De igual forma, se deja en el cuaderno ejecutivo copia de la liquidación de costas (elaboradas por la Secretaría del Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Cali), del Auto de junio 23 de 2017 (el cual resolvió aprobarlas) y de la constancia de ejecutoria de la Sentencia arriba reseñada.

Constancia de lo anterior,


Rubén Darío Chamorro Ramírez
Asistente Administrativo

Sírvase proveer,



**OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI**

Santiago de Cali, agosto diecisiete (17) de dos mil dieciocho (2018).

OFICIO NO: 4774

P

Señor (a) (es):

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO

Calle 8 No. 1-16, Oficina 502 - Edificio Entreceibas

Santiago de Cali - Valle del Cauca

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. NIT. 860.002.184-6

DEMANDADO: MARÍA MAGDA TANGARIFE C.C. 29.101.589

ALCIDES MORENO C.C. 1.297.570

REYNALDO DE JESÚS MORENO TANGARIFE C.C. 10.118.773

EDWIN MORENO TANGARIFE C.C. 94.486.284

RADICACIÓN: 76001-31-03-014-2002-00114-00

Para los fines legales y pertinentes se procede a comunicarle que dentro del asunto de la referencia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali en uso de la competencia otorgada a través Acuerdos Nos. PSAA13-9962, PSAA13-9984 y PSAA13-9991 de 2013, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, avoco el conocimiento del presente asunto y dictó Auto No. 2749 de julio veintisiete (27) de dos mil dieciocho (2018), en el que dispuso: "(...) 1º.- **AVOCAR** conocimiento del presente proceso. 2º.- **ORDENAR** que por conducto de la Oficina de Apoyo se remita al Juzgado Diecinueve CIVIL del Circuito de Cali el presente proceso declarativo de responsabilidad Civil Contractual, previniéndose que por conducto de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución se debe dejar copia de la Sentencia No. 047-2017 como título ejecutivo de la presente ejecución. (...) **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (FDO) ADRIANA CABAL TALERO. Juez.**"

En virtud de lo anterior, se remiten las actuaciones correspondientes al que fuera el proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Contractual instaurado por la Señora MARÍA MAGDA TANGARIFE y Otros, en contra de Coomeva E.P.S. y Otro., el cual se adelantó en su Despacho y se distingue con la radicación 76001-3103-014-2002-00114-00, y que se encuentra integrado en SIETE CUADERNOS con: 674, 2, 60, 15, 13, 4 y 46 folios.

Con la presente se remite copia del Auto No. 2749 de julio 27 de 2018, que ordenó la presente remisión. Sírvase proceder de conformidad.

Cualquier enmendadura invalida esta comunicación, al responder citar la radicación del expediente.

Cordialmente,

CARMEN EMILIA RIVERA GARCIA
Profesional Universitario

RDCHR

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI

CALLE 8 NO. 1-16 OFICINA 403-404 EDIFICIO ENTRECEIBAS

TEL: 8846327 – 889-1593

ofecjeccli@notificacionesrj.gov.co



**OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES
DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI**

Santiago de Cali, agosto diecisiete (17) de dos mil dieciocho (2018).

OFICIO NO: 4774

P

Señor (a) (es):

JUZGADO DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO

Calle 8 No. 1-16, Oficina 502 - Edificio Entreceibas
Santiago de Cali - Valle del Cauca

JUZGADO 19
CIVIL CIRCUITO DE CALI

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. NIT. 860.002.184-6

DEMANDADO: MARÍA MAGDA TANGARIFE C.C. 29.101.589

ALCIDES MORENO C.C. 1.297.570

REYNALDO DE JESÚS MORENO TANGARIFE C.C. 10.118.773

EDWIN MORENO TANGARIFE C.C. 94.486.284

18SEP10PM1/16

RADICACIÓN: 76001-31-03-014-2002-00114-00

Para los fines legales y pertinentes se procede a comunicarle que dentro del asunto de la referencia, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali en uso de la competencia otorgada a través Acuerdos Nos. PSAA13-9962, PSAA13-9984 y PSAA13-9991 de 2013, expedidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, avoco el conocimiento del presente asunto y dictó Auto No. 2749 de julio veintisiete (27) de dos mil dieciocho (2018), en el que dispuso: "(...) 1º.- **AVOCAR** conocimiento del presente proceso. 2º.- **ORDENAR** que por conducto de la Oficina de Apoyo se remita al Juzgado Diecinueve CIVIL del Circuito de Cali el presente proceso declarativo de responsabilidad Civil Contractual, previniéndose que por conducto de la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución se debe dejar copia de la Sentencia No. 047-2017 como título ejecutivo de la presente ejecución. (...) **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE (FDO) ADRIANA CABAL TALERO. Juez.**"

En virtud de lo anterior, se remiten las actuaciones correspondientes al que fuera el proceso Ordinario de Responsabilidad Civil Contractual instaurado por la Señora MARÍA MAGDA TANGARIFE y Otros, en contra de Coomeva E.P.S. y Otro., el cual se adelantó en su Despacho y se distingue con la radicación 76001-3103-014-2002-00114-00, y que se encuentra integrado en SIETE CUADERNOS con: 674, 2, 60, 15, 13, 4 y 46 folios.

Con la presente se remite copia del Auto No. 2749 de julio 27 de 2018, que ordenó la presente remisión. Sírvase proceder de conformidad.

Cualquier enmendadura invalida esta comunicación, al responder citar la radicación del expediente.

Cordialmente,


CARMEN EMILIA RIVERA GARCIA
Profesional Universitario

RDCHR

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI

CALLE 8 NO. 1-16 OFICINA 403-404 EDIFICIO ENTRECEIBAS

TEL: 8846327 – 889-1593

ofecjeccli@notificacionesrj.gov.co